

**Informe Preliminar de la Misión Internacional de Estudio y Acompañamiento del
Instituto Nacional Demócrata (NDI) para las Elecciones Generales de Honduras del
29 de noviembre de 2009**

(Traducción Libre)

Tegucigalpa, 1 de diciembre de 2009

I. Introducción

No obstante que estas elecciones fueron convocadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y todos los candidatos fueron seleccionados antes del derrocamiento del Presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio, después de este evento la crisis política que existía en el país se agudizó y el proceso electoral fue puesto en tela de juicio tanto dentro como fuera del país. En julio, Honduras fue suspendida como miembro activo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como consecuencia del golpe de estado realizado en contravención a la Carta Democrática Interamericana.

Desde junio, Honduras ha experimentado dos campañas distintas: una entre aquéllos que avalaron la destitución del mandatario y los que se opusieron a la misma; la otra, entre los partidos políticos y candidatos contendientes en el propio proceso electoral. El conflicto más amplio relacionado con el derrocamiento del presidente tuvo un impacto en la sociedad hondureña y en el prestigio internacional del país. Sin embargo es difícil medir sus efectos en la campaña electoral, ya que diferentes sectores de la sociedad expresan valoraciones encontradas sobre el proceso y no es fácil obtener información imparcial y verificable.

Algunos sectores han argumentado que llevar a cabo las elecciones en las condiciones mencionadas equivaldría a legitimar un golpe de estado y sentaría un precedente que podría ser utilizado en el futuro para destituir a gobiernos democráticamente electos en otros países. Otros han afirmado que la voluntad de los votantes hondureños expresada a través de las urnas debe ser suficiente para superar la crisis interna y las diferencias entre el país y la comunidad internacional. También se identifican aquéllos que sostienen que llevar a cabo elecciones creíbles puede constituir un importante paso adelante, si las mismas son seguidas por un proceso genuino de reconciliación nacional.

El propósito de esta misión no era pronunciarse sobre asuntos políticos de éste alcance y su presencia en Honduras para acompañar el proceso electoral no debe interpretarse de

esta forma. Más bien, la misión buscó ofrecer un análisis imparcial del desarrollo del proceso electoral, consciente de que la forma en que se llevara a cabo el mismo, impactaría inevitablemente en las condiciones para superar las divisiones políticas en el país. Los hallazgos de los expertos internacionales constituyen una fuente imparcial de información que los hondureños podrían utilizar para llegar a sus propias conclusiones sobre el proceso electoral y, después de las elecciones, dar los pasos necesarios para implementar medidas significativas a fin de asegurar la reconciliación nacional y promover la gobernabilidad democrática.

El Instituto tomó la decisión de enviar esta misión a Honduras poco después de la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José, el cual dio inicio al proceso para resolver el impasse político en el país. Dada la premura del tiempo, NDI no tuvo la oportunidad de organizar una misión internacional de observación electoral formal, ya que tal misión no cumpliría con los estándares establecidos en la ampliamente reconocida y refrendada Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, la cual ha sido firmada por 35 organizaciones destacadas de carácter intergubernamental y no gubernamental y, además, ha sido reconocida con agradecimiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una misión de este carácter hubiera implicado el desplazamiento de observadores de largo plazo y la organización de misiones pre-electorales para evaluar a fondo el período de la campaña, así como la movilización de una red de observadores en todo el país durante la jornada electoral. Por ello, NDI decidió enviar una misión de estudio y acompañamiento más pequeña y menos formal para proveer información imparcial y objetiva sobre las elecciones. Según la mencionada Declaración, este tipo de misión no debe sacar conclusiones sobre el proceso en general.

Nuestra esperanza es que las conclusiones y recomendaciones de esta misión contribuyan a los esfuerzos conjuntos de los hondureños para seguir adelante después de las elecciones, con pasos concretos para alcanzar la reconciliación nacional, de forma tal que se supere la crisis política, se promueva la institucionalidad democrática y el país recupere su estatus dentro de la comunidad internacional.

II. La jornada electoral

El 29 de noviembre, los ciudadanos hondureños acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente, tres designados a la presidencia, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 128 diputados al Congreso Nacional (CN) y los miembros de las 298 corporaciones municipales. En total, aproximadamente 14,500 candidatos – parte de ellos electos en las elecciones primarias de noviembre de 2008 – se postularon para 2,896 cargos de elección popular en todo el territorio nacional.

En términos generales, la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica y ordenada; ni las organizaciones nacionales de observación ni los partidos políticos reportaron problemas sistemáticos durante la jornada electoral. Sin embargo, en San Pedro Sula se reportó un incidente en el cual la policía dispersó por la fuerza una marcha contra las

elecciones en curso. Según reportes recibidos por esta misión, varios participantes en esta protesta resultaron heridos o fueron detenidos.

En la mayoría de las mesas electorales receptoras (MER) la votación comenzó con menos de una hora de retraso y los materiales fueron distribuidos sin mayor problema. La puntualidad en el inicio de la votación constituye una mejora con respecto a procesos electorales recientes en la región. A pesar de la existencia de problemas menores o aislados, los miembros de las MER generalmente llevaron a cabo de manera profesional su labor durante la jornada electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) empleó nuevas medidas para mejorar el proceso de escrutinio de los votos, el cual tradicionalmente se ha caracterizado por falta de transparencia y alegaciones de fraude. El Tribunal abrió el escrutinio en las MER al público y permitió la presencia de observadores y partidos políticos en el centro de cómputo donde se está realizando el escrutinio nacional. Hubo confusión inicial en ciertos lugares donde observadores y ciudadanos fueron retirados de las MER al iniciar el escrutinio. Sin embargo, el TSE realizó de inmediato anuncios públicos reforzando su orden inicial de permitir que cualquier ciudadano pudiera presenciar el conteo de los votos, lo cual llevó a que las mesas abrieran sus puertas de nuevo. Este esfuerzo para mejorar la transparencia del escrutinio constituye una mejora significativa en comparación con elecciones pasadas.

Para contrarrestar problemas anteriores de escrutinios realizados de manera poco transparente y a veces de forma incompleta – tal como sucedió en las elecciones de 2005 – el Tribunal dio algunos pasos para mejorar el transporte del material de las MER al centro de cómputo en Tegucigalpa, donde se realiza el escrutinio nacional. Además, el TSE fortaleció los controles externos sobre el escrutinio, contribuyendo así a la mayor transparencia del proceso. Los esfuerzos del Tribunal para anunciar los resultados preliminares de la elección presidencial en su totalidad pocas horas después de cerradas las urnas, resultaron parcialmente infructuosos.

Aún cuando muchos aspectos del proceso se llevaron a cabo sin fallas generalizadas o serias, algunos problemas fueron presenciados por esta misión o reportados por observadores nacionales. El mal uso de las credenciales MER entregadas a los partidos políticos aparentemente permitió la sobrerrepresentación en las mesas de los dos partidos mayoritarios. Existe una amplia percepción de que los dos partidos dominantes incrementaron su presencia en las mesas adquiriendo o comprando credenciales correspondientes a los partidos minoritarios. Se observaron algunas dificultades durante el conteo de los votos en las MER, especialmente durante el escrutinio de las elecciones legislativas.

En el pasado, el voto en el exterior se llevó a cabo en los consulados hondureños en los Estados Unidos, país en donde más de 18,000 ciudadanos están inscritos para votar. Dado que al día de las presentes elecciones, los consulados estaban bajo la autoridad de representantes del presidente depuesto, el TSE organizó centros de votación alternos en

los cuales los representantes de los partidos que participaron en la contienda organizaron y coordinaron estas mesas de votación.

Partidos políticos y candidatos

Hubo marcada actividad de varios partidos durante la jornada electoral, incluyendo la presencia de puestos de información cerca de los centros de votación para ayudar a los electores a encontrar sus respectivas mesas y fomentar el apoyo a sus candidatos. Aunque esta práctica al parecer fue bien recibida por muchos electores, algunos de estos puestos de información se encontraban a menos de 50 metros de un centro de votación, lo que contraviene la Ley Electoral. Además se encontró material de campaña dentro de algunos centros de votación, lo cual generó quejas de ciudadanos y representantes de partidos.

El día de la elección, los principales partidos y candidatos estuvieron monitoreando activamente el proceso a nivel nacional, especialmente con respecto a los preparativos relacionados con la transmisión de resultados y el análisis de los mismos. Cuando el Tribunal anunció los primeros resultados parciales la misma noche de la elección, los candidatos perdedores reconocieron su derrota. Como se menciona más adelante, la presentación de un conteo de votos independiente ayudó a incrementar la confianza en la transmisión preliminar de los resultados de la elección presidencial.

Observadores electorales

Los observadores electorales nacionales hicieron una contribución importante a la transparencia del proceso electoral. La coalición cívica Mirador Electoral realizó un monitoreo de algunos aspectos de la etapa pre-electoral, incluyendo la cobertura de medios, el financiamiento de campañas y el cumplimiento de la Ley Electoral, entre otros. El grupo continuará monitoreando el período post-electoral y publicará un informe sobre sus hallazgos durante las próximas semanas. La organización socia de NDI Hagamos Democracia (HD)¹, una coalición de diversos grupos cívicos hondureños, organizó un conteo rápido² de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la elección presidencial con una cobertura de más de mil mesas electorales receptoras (MER). A pesar de que los observadores de HD tuvieron algunos problemas aislados al intentar acceder a las mesas durante el escrutinio, el grupo pudo completar un conteo rápido y hacer una proyección de los resultados que coincidió con los resultados preliminares y parciales anunciados por el Tribunal la noche de las elecciones. Sin embargo, hubo una discrepancia entre la proyección de HD del nivel de participación en el proceso y la información inicial presentada por el Tribunal. La misión espera que esta discrepancia pueda ser clarificada una vez que los resultados finales sean anunciados en detalle. Un aspecto positivo fue que el TSE facilitó el trabajo de los observadores nacionales durante

¹ La coalición de Hagamos Democracia incluye a la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y la Universidad Metropolitana de Honduras (UHM).

² Un conteo rápido utiliza resultados electorales oficiales de un número estadísticamente significativo de mesas electorales receptoras seleccionadas aleatoriamente para proyectar los resultados de la elección.

el proceso electoral. De hecho, el Tribunal presentó oficialmente el informe de HD en su conferencia de prensa la noche de las elecciones.

La Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y el Centro Carter decidieron no enviar observadores para monitorear las elecciones del 29 de noviembre debido a la no restitución de Zelaya y a la interrupción en la implementación del Acuerdo Tegucigalpa/San José. El TSE invitó a múltiples organizaciones e individuos de alto perfil a observar las elecciones y anunció que cientos de observadores habían sido acreditados; no obstante, la mayoría de los organismos electorales de la región declinaron la invitación.

Desafortunadamente, el TSE ofreció cubrir los costos de transporte, alojamiento y comida para los invitados, oferta que fue aceptada por algunos observadores. La Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones establece que los observadores internacionales no deberían aceptar apoyo financiero o logístico del gobierno cuyas elecciones están siendo observadas, ya que esto podría generar un conflicto de intereses significativo.

Participación ciudadana

Durante el período anterior a las elecciones hubo llamados tanto a la participación como al boicot de las elecciones. Los llamados a participar fueron realizados por partidos políticos y otros sectores como la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Por otro lado, varios grupos en todo el país llamaron a boicotear las elecciones.

La campaña en favor del boicot no estuvo coordinada a nivel nacional, ya que muchos de los grupos que apoyan a Zelaya tenían diferentes opiniones sobre cómo reaccionar ante la crisis, siendo difícil medir el nivel de respuesta ciudadana a los llamados a la abstención. Durante las semanas anteriores a las elecciones se reportaron amenazas aisladas de violencia, incluyendo bombas, vandalismo y actos de desobediencia civil. Como respuesta a las amenazas de boicot y disturbios relacionados con las elecciones, el TSE anunció una mayor presencia militar a nivel nacional y una operación especial de la policía para garantizar el orden público durante la jornada electoral. Algunos representantes de la sociedad civil expresaron temor de que tanto las amenazas de violencia como las nuevas medidas de seguridad – incluyendo retenes militares y una mayor presencia de la policía – podrían causar que algunos ciudadanos no salieran a votar.

El papel de las fuerzas de seguridad

Tal como se establece en la ley y como ha sucedido tradicionalmente en Honduras, las fuerzas armadas juegan un papel en el proceso electoral. Además de garantizar la seguridad del proceso, los militares hondureños proporcionan apoyo logístico al TSE, incluyendo el transporte de ida y vuelta de los materiales y documentos electorales. En años recientes, el papel que juegan los militares durante el proceso electoral se subordinó al TSE – una decisión que fue refrendada en el Acuerdo Tegucigalpa/San José –. Sin

embargo, dado el papel que jugaron las fuerzas armadas en la remoción del Presidente Zelaya, algunos sectores han expresado preocupación sobre su imparcialidad. Como respuesta a estas preocupaciones, el TSE creó la figura de los custodios electorales, ciudadanos no partidistas que estarían presentes en los centros de votación para recibir los materiales electorales sellados de parte de los militares. A pesar de sus esfuerzos, el Tribunal no pudo captar suficientes custodios para cubrir todos los centros de votación en el país. Hasta ahora, la misión no ha recibido ninguna información sobre problemas relacionados con la entrega y retorno de los materiales electorales.

Durante la jornada electoral hubo una presencia visible de las fuerzas armadas y la policía, misma que aparentemente no interfirió en el proceso, reportándose aislados incidentes de abuso de poder.

NDI reconoce que la credibilidad de un proceso electoral se extiende más allá del día de las elecciones y que se deben tomar en cuenta todos los aspectos del proceso. Éstos incluyen, entre otros factores: las condiciones establecidas por la legislación electoral; la habilidad que tienen los ciudadanos para recibir información suficiente y precisa sobre las opciones políticas; la habilidad de los contendientes políticos para organizar a los ciudadanos y buscar su apoyo; la libertad que tienen los ciudadanos y contendientes políticos para participar en los procesos políticos y electorales sin miedo de intimidación, violencia o castigo; los procesos de votación, escrutinio, tabulación y anuncio de los resultados; la investigación y resolución de denuncias; y el contexto en el que se forma un nuevo gobierno. Debido a las limitaciones de esta misión de estudio y acompañamiento, NDI no pudo llevar a cabo una evaluación exhaustiva e independiente del período pre-electoral. Este informe se basa en información recopilada de diversos representantes de la sociedad hondureña y de la comunidad internacional.

III. El proceso pre-electoral

Administración y preparación electoral

Marco normativo

El marco normativo vigente para el proceso electoral contiene, en general, disposiciones que permiten elecciones democráticas, aunque en este proceso algunas de éstas fueron aplicadas de manera inconsistente. Las elecciones generales de 2009 se desarrollaron en el marco de la Constitución Política de Honduras, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) y otros reglamentos electorales. La Constitución hondureña asigna al Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad de llevar a cabo todas aquellas actividades y procedimientos que tienen relación con el proceso electoral. Desde la transición democrática en 1982, Honduras ha adoptado una serie de reformas electorales que han incluido, entre otros cambios, la separación del Registro Nacional de las Personas (RNP) de las autoridades electorales; la regulación de las campañas políticas y el financiamiento estatal de los partidos políticos; el establecimiento de cuotas para mujeres candidatas al congreso y corporaciones municipales; y la adopción de medidas con el fin de proteger al TSE de influencias partidarias, entre otros.

A pesar de estos importantes cambios a las normas regulatorias de los procesos electorales, los mismos no se han implementado ni aplicado de manera consistente. No se ha cumplido con las cuotas del 30 por ciento de mujeres en las listas plurinominales; los gastos electorales no se han regulado en la manera establecida por la ley; y se percibe que el TSE mantiene un carácter partidario. Además, hay un recurso judicial pendiente en el que se cuestiona la legalidad de la selección de tres de los cuatro magistrados del TSE, quienes fueron nombrados aunque ostentaban cargos de elección popular en ese momento, lo que es considerado por los demandantes una violación de las inhabilidades establecidas por la Constitución.

Una parte de la asistencia técnica brindada al TSE por la cooperación internacional se suspendió como consecuencia de las demoras en la restitución de Zelaya. En ese momento, algunos expertos manifestaron su preocupación de que este inesperado retiro de asistencia pudiera surtir efectos adversos en los procedimientos de carácter técnico implementados por el Tribunal, como el programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Censo Electoral

El actual Censo Nacional Electoral, elaborado con base en la información proporcionada por el RNP, comprende aproximadamente 4.6 millones de ciudadanos en un país de casi 7.9 millones de personas. Desde 2001 hasta 2009, el número de ciudadanos hondureños aumentó en un 20 por ciento, mientras que el número de votantes en el censo aumentó en un 33 por ciento. Sin embargo, de 2001 a 2005 el número de votos emitidos disminuyó en un cuatro por ciento y la tasa de abstención creció casi un 34 por ciento. Algunos analistas creen que el incremento de la abstención se debe en parte a un censo electoral inflado, en donde a la inscripción de nuevos ciudadanos se le agrega la no depuración de un número estimado de un millón de votantes que habrían emigrado fuera del país o fallecido. El censo ha sido tema de preocupación tanto para sectores hondureños como para monitores de procesos electorales anteriores, quienes han señalado estos problemas. Merece resaltarse que a pesar de estas inquietudes no se ha auditado el censo de manera independiente. La falta de financiamiento obligó a cancelar la renovación de tarjetas de identidad, originalmente programada para 2006, la cual habría llevado a una depuración del censo electoral. El Tribunal tuvo que tomar la decisión de utilizar un censo que muchos consideran inflado y desactualizado.

La campaña electoral

Ambiente pre-electoral y restricciones de libertades ciudadanas y de medios

Posterior a los eventos del 28 de junio, se impusieron restricciones a algunos periodistas y medios de comunicación. Después del regreso del presidente depuesto al país, se decretó un estado de sitio el 27 de septiembre, el cual permaneció vigente por las primeras tres semanas del período oficial de la campaña electoral. El decreto suspendió algunas garantías constitucionales, incluyendo las de libertad de expresión, libertad de asociación y el requisito de una orden judicial para llevar a cabo detenciones. Durante

esta suspensión de derechos civiles, las fuerzas de seguridad cerraron dos medios de comunicación opositores y, según reportes, dañaron sus equipos de transmisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias – hondureñas e internacionales – que defienden los derechos humanos, expresaron sus preocupaciones sobre estos y otros hechos, citando el cierre de ciertos medios de comunicación y amenazas contra los mismos; detenciones arbitrarias; violaciones de la libertad de expresión; y uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones por parte de los organismos de seguridad pública.

Estándares ampliamente reconocidos para elecciones democráticas exigen el respeto a los derechos fundamentales, los cuales incluyen, entre otros: el derecho a expresar una opinión política; el derecho a buscar e impartir información a través de los medios; el derecho a movilizarse por el territorio nacional para hacer campaña o participar en una campaña; y el derecho a la protección de la ley y la igualdad ante la ley. Las restricciones de las libertades civiles impuestas por el gobierno, incluyendo la limitación de la libertad de expresión, asociación y protesta, posiblemente podrían haber infringido algunos de estos derechos fundamentales. La misión encontró que diferentes sectores de la sociedad hondureña percibían estas restricciones, así como su impacto final en el proceso, de maneras muy divergentes.

Partidos políticos y candidatos

Cinco partidos participaron en las elecciones presidenciales y legislativas, mientras otras candidaturas independientes participaron en las elecciones municipales. Algunos candidatos, incluyendo al aspirante independiente a la Presidencia de la República, Carlos H. Reyes, se retiraron de la contienda electoral como un mecanismo de protesta contra la no restitución de Zelaya. Los miembros de la misión escucharon información anecdótica y contradictoria con respecto al número de candidatos que habrían renunciado a sus candidaturas, oscilando la cifra entre 70 y 250 casos.

Los partidos y candidatos que al final participaron en las elecciones expresaron puntos de vista divergentes sobre cómo la crisis política habría afectado su capacidad de hacer campaña. Algunos sectores afirmaron que la campaña se desarrolló en condiciones de equidad y citaron mejoras, tales como un mayor acceso a los medios de comunicación para los partidos pequeños, los cuales participaron junto a los partidos mayoritarios en 32 foros políticos ampliamente transmitidos por los medios. No obstante, muchos actores manifestaron que las restricciones de las libertades civiles y tensiones en algunas regiones dificultaron las formas tradicionales de hacer campaña, incluyendo la celebración de mítines políticos y la colocación de propaganda electoral por todo el país. Algunos partidos mencionaron que las divisiones internas que surgieron a partir de la crisis política los debilitaron ante las elecciones.

IV. Recomendaciones

En el espíritu de la solidaridad internacional, la misión presenta las siguientes recomendaciones para ayudar a superar las divisiones en la sociedad hondureña y fortalecer los procesos electorales y la institucionalidad democrática.

- Se debería establecer la Comisión de la Verdad prevista en el Acuerdo Tegucigalpa/San José con la mayor prontitud posible. El propósito de dicha Comisión es clarificar los hechos antes y después del derrocamiento de Zelaya el pasado 28 de junio. La Comisión debería también asumir un mandato para examinar las violaciones de los derechos humanos durante el período anterior a las elecciones del 29 de noviembre.
- El Tribunal Supremo Electoral debería divulgar los resultados preliminares y oficiales, de manera expedita, desglosándolos por mesa electoral para todas las elecciones del 29 de noviembre, así como publicar los mismos en su sitio web en un formato electrónicamente accesible que también posibilite el análisis independiente de los datos.
- Se debería elaborar un censo electoral nuevo o actualizado como mecanismo para incrementar la confianza en el proceso electoral y servir de base confiable para determinar la elegibilidad de los votantes. Como primer paso, se debería efectuar una auditoría independiente del censo actual.
- Se debería aplicar la Ley Electoral de manera que se cumpla con el espíritu y la letra de las disposiciones que establecen la independencia de las autoridades electorales.
- El Tribunal Supremo Electoral debería terminar con la práctica de distribuir acreditaciones en blanco a los partidos políticos para sus miembros de mesa. El Congreso Nacional y el Tribunal deberían considerar medidas de reforma para asegurar que los procesos de votación y escrutinio no sean susceptibles a una inoportuna influencia partidaria.
- El Tribunal Supremo Electoral debería reducir su dependencia de las fuerzas armadas para el apoyo logístico en la administración electoral.

- Se debería ampliar la capacitación para los miembros de mesa, especialmente en lo referente a la fase de escrutinio.

La misión escuchó repetidamente que la crisis comenzó antes del 28 de junio y continuará después de las elecciones, a menos que se inicie un proceso genuino de reconciliación. No obstante la controversia surgida del hecho de llevar a cabo las elecciones bajo las circunstancias actuales, los líderes hondureños recientemente electos tienen la oportunidad y el deber de hacer todo lo posible para superar las divisiones en el país y con ello responder de la mejor manera posible a las esperanzas y aspiraciones del pueblo hondureño.

La misión desea expresar su agradecimiento a los ciudadanos hondureños que compartieron su tiempo y sus opiniones con la misión de estudio y acompañamiento de NDI. Sus observaciones y aportes permitieron a la misión cumplir con su objetivo.

V. La misión de estudio y acompañamiento y su labor

La misión incluyó a: Horacio Boneo, ex Director de la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas, Argentina; Luis Alberto Cordero, ex Director Ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), Costa Rica; Matt Dippell, Director Adjunto para América Latina y el Caribe de NDI, Estados Unidos; Sam Gejdenson, ex Miembro del Congreso y Miembro de Más Alto Rango de la Comisión de la Cámara de Representantes para Asuntos Extranjeros, Estados Unidos; Michele Manatt, Asesora de Relaciones Internacionales, Estados Unidos; Eduardo Núñez, Representante de NDI para Honduras y Guatemala, Costa Rica; Marek Peda, Experto Electoral, Polonia; Philip Robbins, Presidente de la Junta Directiva del Centro Nacional de Derecho para el Intercambio Interamericano, Estados Unidos; Salvador Romero, ex Magistrado Presidente de la Corte Nacional Electoral, Bolivia; Jim Swigert, Director Regional para América Latina y el Caribe de NDI, Estados Unidos; Maureen Taft-Morales, Especialista en Asuntos Latinoamericanos del Servicio de Investigación Congresional, Estados Unidos; Félix Ulloa, ex Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, El Salvador; y Kenneth Wollack, Presidente de NDI, Estados Unidos.

Los delegados mencionados fueron acompañados por el siguiente personal de NDI: Sara Barker, Keila González, Laura Grace, Sandy Guzmán, Guido Iñigo, Alex Kerchner, Mario Mitre, Anna Prow, Wendy Ramirez, Dan Reilly y Rob Runyan. Esta misión internacional de estudio y acompañamiento electoral se financió a través de un convenio de cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

La misión desplazó tres equipos en Tegucigalpa y sus alrededores y cinco equipos a otras regiones, las cuales incluyeron Comayagua, Danlí, Juticalpa, La Ceiba y San Pedro Sula. Los miembros de los equipos se reunieron con autoridades electorales locales, grupos de observadores, representantes partidarios y oficiales de seguridad pública, y observaron el

proceso de votación y escrutinio durante el transcurso de la jornada electoral. Posteriormente a las elecciones, todos los miembros de la misión se volvieron a reunir en Tegucigalpa para compartir sus respectivos hallazgos y preparar este informe.

La misión presenta el análisis anterior con base en información ofrecida por una amplia gama de hondureños, entre los cuales se encuentran: candidatos presidenciales, legislativos y municipales de toda la gama del espectro político; líderes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe del Estado; representantes de todos los actores participantes en la Comisión de Verificación para el Acuerdo Tegucigalpa/San José; representantes de grupos defensores de derechos humanos, las comunidades religiosas, el sector empresarial, sindicatos, medios de comunicación social y la comunidad internacional; observadores electorales nacionales; miembros de las fuerzas de seguridad; oficiales electorales a los niveles nacional, departamental y municipal; y académicos. La misión también recopiló información a través de su observación directa de la votación durante la jornada electoral y de conversaciones con HD, el socio hondureño de NDI que llevó a cabo una observación de ámbito nacional. Con su presencia en las elecciones hondureñas de 2009, NDI no busca vigilar ni brindar una valoración final del proceso electoral. El Instituto reconoce que la ciudadanía hondureña será la que finalmente determine la credibilidad del proceso.

VI. Información de contacto

Para mayor información, favor de contactar a: Eduardo Núñez, enunez@ndi.org, en Tegucigalpa o Jim Swigert, jswigert@ndi.org, en Washington, D.C.